

Rancagua, diecinueve de abril de dos mil veintitrés.

Vistos:

Comparece el abogado Pedro Ignacio Peña Sánchez, en representación de la parte demandante en autos laborales RIT O-26-2022, caratulados "GONZÁLEZ con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL", quien deduce recurso de nulidad contra la sentencia definitiva dictada con fecha tres de enero de dos mil veintitrés, por el Juez Titular del Juzgado de Letras del Trabajo de Rancagua, que resuelve:

I.- Que se RECHAZA la demanda interpuesta por don PEDRO IGNACIO PEÑA SANCHEZ, chileno, Abogado, cédula nacional de identidad N° 16.658.896-0, en calidad de mandatario judicial, de doña ROMINA ALEJANDRA GONZALEZ NUÑEZ, técnico en relaciones públicas, cédula de identidad N°16.554.387-4, demanda en Procedimiento de Aplicación General por Nulidad del Despido, Despido Injustificado y Cobro de Prestaciones Laborales Adeudadas, en contra de la ex empleadora de su mandante, la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL RUT. N 69.080.500-6, cuyo representante legal es don SANTIAGO AQUILES GARATE ESPINOZA, Alcalde, cédula de identidad N° 6.966.766- K, chileno, por no acreditarse la existencia de relación laboral.

II.- Que no se condenará en costas al actor por estimar que tuvo motivo plausible para litigar.

Funda su recurso en las causales del artículo 478 letra c) y 477 del Código del Trabajo, las que interpone de manera subsidiaria, pidiendo que este Tribunal de Alzada conociendo del mismo, lo acoja e invalide la sentencia antes singularizada, y dicte la sentencia de reemplazo que en derecho corresponde; todo ello en razón de los antecedentes que expone.

En la audiencia de la vista del recurso, los abogados de las partes alegaron por las pretensiones de sus representados. Finalizadas las exposiciones de los intervinientes se puso término al debate, quedando la causa en estado de alcanzar acuerdo, y producido éste, se procede a dictar el siguiente fallo.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: MKFLXEVEGLV

Considerando:

Primero: Que, previo al desarrollo de las causales de nulidad el recurrente explica como antecedentes del recurso que, como mandatario judicial de doña Romina Alejandra Gonzalez Nuñez, interpuso, con fecha 13 de enero de 2022, demanda por Declaración de Relación Laboral, Despido Injustificado y Cobro de Prestaciones Laborales adeudadas en contra de la Ilustre Municipalidad de San Francisco de Mostazal.

Indica que la demandante de autos, doña Romina González, comenzó a prestar servicios bajo subordinación y dependencia a partir del 1 de agosto de 2020 hasta su despido el 31 de octubre de 2021, mediante múltiples contratos de honorarios, pero que en la realidad eran contratos de trabajo.

La demandante se desempeñó en cargos evidentemente estables, permanentes e indispensables en la organización jerárquica de la demandada. Sus funciones jamás fueron no habituales de esta organización, tampoco se trató de cometidos específicos y mucho menos los servicios se pueden catalogar como transitorios y temporales.

Agrega que la demandada en su contestación solicitó el rechazo de la demanda en todas sus partes, con costas, bajo el principal argumento de señalar que el vínculo que unió a las partes fue de carácter civil bajo una contratación a honorarios y negó, en consecuencia, que fuera de índole laboral.

Segundo: Que ahora, en relación a los motivos de nulidad incoados, señala que interpone de manera subsidiaria los previstos en el artículo 478 letra c) del Código del Trabajo, referido a cuando sea necesaria la alteración de la calificación jurídica de los hechos, sin modificar las conclusiones fácticas del tribunal inferior y; el establecido en el artículo 477 del mismo cuerpo legal, esto es, cuando la sentencia se haya dictado con infracción de ley que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo.

En cuanto a la primera casual esgrimida dice que, la sentencia incurre en una errada calificación jurídica de los



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: MKFLXEVEGLV

hechos, puesto que estima que los servicios prestados por la demandante no corresponden a aquellos regidos por el Código del Trabajo, sino que se tratan en su conjunto de aquellos propios de la contratación bajo un vínculo civil; una relación de prestación de servicios sujeta a honorarios, tal como se observan de los hechos acreditados en autos, los cuales se encuentran contemplados en los considerandos décimo tercero, décimo cuarto y décimo quinto de la sentencia.

Refiere que entonces, en base a la prueba rendida en autos y conforme el propio análisis que realiza el tribunal de la prueba, las labores ejecutadas por la demandante exceden lo dispuesto por el artículo 4 de la ley 18.883, es decir, no constituyen un cometido específico ni tampoco funciones habituales y accidentales. En ese sentido, están fuera del marco legal autorizado para contratar honorarios.

Debido a lo anterior, considera que es posible concluir que hubo un exceso en la contratación por parte del ente municipal, es decir, fuera del marco normativo del artículo 4 de la ley 18.883 y que, además, al haber índices de subordinación y dependencia, concurría entonces estimar a la relación habida entre las partes como una de carácter laboral tal como se ha pronunciado la jurisprudencia al respecto.

Añade que el concepto "cometidos específicos" no está definido en el artículo 4 de la ley 18.883, por lo que es un concepto abierto que debe ser llenado de contenido por la jurisprudencia, citando diversos fallos al efecto, en virtud de los cuales el tribunal no debió haber calificado como cometido específico las labores que realizó el actor, sino que debió imputarle la calidad de genéricos y así no circunscribirlo a la norma del artículo 4 de la ley 18.883. En tal sentido, es necesaria la alteración de la calificación jurídica.

Tercero: Que, en cuanto al análisis de la causal interpuesta de manera subsidiaria a la anterior, esto es, cuando la sentencia se haya dictado con infracción de ley que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, indica que, se ha configurado en la especie una infracción de



ley en cuanto a la falsa aplicación del artículo 4 de la ley 18.883 sobre Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, al ser aplicado indebidamente al caso de autos y, del artículo 1 del Código del Trabajo al no ser aplicada dicha norma.

En ese orden de cosas, la recurrente considera que la infracción de ley en que ha recaído el sentenciador de instancia se fundamenta en que la demandante prestó servicios a la Ilustre Municipalidad de Mostazal, en ejecución de labores propias y permanentes del Municipio, bajo subordinación y dependencia, ergo, bajo las características propias y naturales de una relación de trabajo; debiendo regirse por las normas establecidas en el régimen general y supletorio contenido en el Código del Trabajo, y no por las normas del estatuto que señala la Ley N° 18.883.

Reclama también infringidos los artículos 7 y 8 inciso primero del Código del Trabajo, al no aplicarlos correctamente, dado que, de acuerdo al tenor de lo dispuesto en la primera disposición y conforme lo acreditado en juicio, correspondía determinar que lo que vinculó a las partes de autos, fue un contrato de trabajo y no una contratación a honorarios.

Luego, el principio de Primacía de la Realidad se encuentra consagrado en el inciso primero del artículo 8° del Código del Trabajo, en la medida que toda prestación de servicios en los términos señalados en el artículo 7° del mismo, esto es, de carácter personal, contra el pago de una remuneración, y bajo subordinación y dependencia, hace presumir la existencia de un contrato de trabajo.

Cuarto: Que, en primer lugar, cabe recordar que los motivos de nulidad deducidos tienen un alcance estrictamente jurídico, lo que supone fidelidad absoluta a los hechos probados en la sentencia, pues lo que se ha de examinar -en casos como el de autos- es si tales hechos encuadran en el supuesto legal respectivo. En definitiva, para poder examinar el juzgamiento jurídico del caso resulta menester que los hechos a partir de los que se estructura la impugnación se



encuentren fijados en la sentencia, pues solo de cumplirse tal exigencia se podrá generar el debate sobre la infracción de ley o calificación jurídica que se denuncia.

De este modo, "si el recurso desarrolla la infracción de ley a partir de hechos que no se tuvieron por acreditados en la sentencia o en torno a hechos distintos de aquellos que se han dado por establecidos en el mismo fallo o considerando hechos que no forman parte de los fijados en la resolución impugnada, tal arbitrio estará destinado a su rechazo" (Astudillo C., Omar; "El Recurso de Nulidad Laboral", Thomson Reuters, año 2012, pág. 77).

Quinto: Que, del estudio de la sentencia impugnada aparece que desde el considerando Quinto al Duodécimo, el juzgador analiza la prueba incorporada por las partes al juicio, señalando que del mérito del certificado emitido por doña Lorena Zavala González, Directora de Administración y finanzas de la Municipalidad de Mostazal; boletas de honorarios; Decretos Alcaldicios y contratos de honorarios establece que:

a.- La actora prestó servicios por el periodo que va desde el 1 de septiembre de 2020 al 28 febrero de 2021, por 6 meses, tiempo respecto del cual existe contrato de honorarios.

b.- Durante los meses de marzo, abril y mayo de 2021, no existe contrato de honorario, resolución o decreto. Tampoco existe boleta de honorarios por el periodo de 3 meses que dé cuenta del pago. Tampoco mediante los certificados de cotizaciones es posible conocer el contenido de un trabajo concreto realizado durante esa época.

c.- Conforme a exhibición de documentos, se acredita que con fecha 9 de marzo de 2021 se dictó Decreto 363 en el cual se aprueba la renuncia voluntaria de la actora con fecha 1 de marzo de 2021.

d.- También la actora presta servicios por el periodo que va desde el 1 de junio de 2021 hasta 31 de octubre de 2021, (5 meses) época respecto de la cual existe contrato de



honorarios, por lo que el total meses trabajados es de 11 meses.

e.- En el considerando Décimo Cuarto establece que, la demandante realizaba las actividades para la cual fue contratada en los dos contratos del periodo, que tienen que ver con relaciones públicas, labores de comunicación y afines, concluyendo en el basamento Décimo Quinto que, se aprecia que la demandante trabajaba esencialmente en lo que había sido contratada, esto es, en cometidos específicos que señala su contratación.

Sexto: Que, en conclusión, el sentenciador de la instancia, establece por una parte que las funciones realizadas por la actora para la demandada corresponden a cometidos específicos y; por la otra, desde el fundamento Décimo Noveno en adelante, explica que no hay pruebas claras que den cuenta de la existencia de los elementos requeridos para la concurrencia de un vínculo de subordinación y dependencia, tales como control horario, jornada de trabajo, instrucciones por parte de la jefatura, o el reconocimiento de beneficios como feriados y licencias médicas.

Séptimo: Que, en tal contexto, no es posible compartir la opinión del recurrente, en cuanto a una errada calificación jurídica de los hechos en relación a lo dispuesto en los artículos 1 del Código del Trabajo y 4 de la Ley 18.883, puesto que esta última norma establece en lo pertinente que *"Podrán contratarse sobre la base de honorarios a profesionales y técnicos de educación superior o expertos en determinadas materias, cuando deban realizarse labores accidentales y que no sean las habituales de la municipalidad; mediante decreto del alcalde. Del mismo modo se podrá contratar, sobre la base de honorarios, a extranjeros que posean título correspondiente a la especialidad que se requiera.*

*Además, se podrá contratar sobre la base de honorarios, la prestación de servicios para **cometidos específicos**, conforme a las normas generales(...)"*.



Pues bien, precisamente el sentenciador ha establecido por una parte que, la actora realizaba solo las labores específicas señaladas en sus respectivos contratos de honorarios, que otorgaba por sus servicios las respectivas boletas de honorarios y la existencia de los Decretos Alcaldicios que aprueban los contratos de prestación de servicios personales a honorarios; y por la otra, no identifica control horario, control de jefatura ni jornada de trabajo, tampoco logra establecer una continuidad en la prestación de los servicios, todos elementos que le permitieron descartar la existencia de un vínculo de subordinación y dependencia, lo que sustenta su decisión.

Octavo: Que, por las mismas razones es posible rechazar la causal subsidiaria de infracción de ley, específicamente en relación a los artículos antes mencionados y los artículos 7 y 8 del Código del Trabajo, en cuanto el primero de ellos señala que: *"Contrato individual de trabajo es una convención por la cual el empleador y el trabajador se obligan recíprocamente, éste prestar servicios personales bajo dependencia y subordinación del primero, y aquél a pagar por estos servicios una remuneración determinada."*, desde que no se ha acreditado el vínculo de subordinación y dependencia, elemento esencial para estar en presencia de un contrato de trabajo, lo que es válido asimismo, para el artículo 8.

Noveno: Que, en definitiva, al tener los motivos de nulidad incoados un alcance estrictamente jurídico lo que implica fidelidad a los hechos establecidos en la sentencia y, considerando que el recurso desarrolla las infracciones a partir de hechos que no se tuvieron por acreditados en el fallo o en torno a hechos distintos de aquellos que se han dado por establecidos en el mismo, no podrán ser acogidas las causales de nulidad deducidas.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 474, 478, 479, 480, 481 y 482 y siguientes del Código del Trabajo, se resuelve:

I.- Que, **SE RECHAZA** el recurso de nulidad deducido por el abogado don Pedro Ignacio Peña Sánchez, en representación



de la demandante, en contra de la sentencia dictada con fecha tres de enero de dos mil veintitrés, por el Juez Titular del Juzgado de Letras del Trabajo de Rancagua, en los autos RIT O-26-2022, y en consecuencia, **no es nula**.

II.- Que no se condena en costas al recurrente, por haber tenido motivo plausible para litigar.

Regístrese y comuníquese.

Redacción del Ministro Sr. Michel González Carvajal.

Rol N° 35-2023. Laboral



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: MKFLXEVEGLV

Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Rancagua integrada por los Ministros (as) Pedro Salvador Jesus Caro R., Michel Anthony Gonzalez C. y Abogado Integrante Sergio Alfonso Gana R. Rancagua, diecinueve de abril de dos mil veintitres.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: MKFLXEVEGLV